

El Síndrome del Deterioro Económico y la Búsqueda del Cambio

Janet Kelly, Pedro A. Palma

Introducción

Desde fines de la década de los setenta la economía venezolana comenzó a mostrar un comportamiento errático después de muchos años de estabilidad y alto crecimiento. Los gobiernos que se fueron sucediendo aplicaron distintos enfoques para resolver los graves problemas que el sistema económico difundía al núcleo de la sociedad. Sus fracasos contribuyeron a generar un descontento que minó la confianza y generó muchas teorías que competían entre sí por explicar qué se había hecho mal. Durante el último cuarto de siglo, el país disfrutó de un flujo de ingresos proveniente del petróleo que brindó la oportunidad de colocar a Venezuela en la ruta hacia el desarrollo. Sin embargo, para el fin del milenio, la mayoría de los habitantes pensaba que toda su riqueza se había reducido a nada. ¿Cómo llegó a suceder esto? ¿Podría la “revolución” de Chávez encontrar cómo salir del laberinto?

Para dar respuesta a estas preguntas es necesario comprender la interacción entre los eventos económicos que caracterizaron el período democrático desde 1958, y los criterios económicos que le sirvieron de guía a quienes formularon las políticas. Este capítulo refleja que, a pesar de las tendencias arraigadas en muchas naciones desarrolladas y en desarrollo, Venezuela se resistió a aceptar la idea de que los procesos de economía de mercado generan más prosperidad e igualdad. Los experimentos de economía de mercado, especialmente el esfuerzo de muy corta vida que se hizo para liberalizar la economía entre 1989 y 1993, generaron profundos e incluso violentos conflictos, reforzando así el tradicional prejuicio respecto a buscar el crecimiento y la redistribución del ingreso a través de las acciones gubernamentales. A pesar de que la mayoría de las reformas que se hicieron durante esa época se mantuvieron, y algunas incluso se profundizaron, los gobiernos sucesivos siguieron fracasando en lo que se refiere a alcanzar la estabilidad necesaria para lograr un crecimiento sostenido.

La campaña “antineoliberal” y el resultante triunfo político de Hugo Chávez en 1998 parece reflejar —una vez más— la gran preferencia que tiene la mayoría de los venezolanos por dejar que el Estado tome la iniciativa, así como su desconfianza respecto a al papel que pueden jugar las fuerzas del mercado en el proceso de desarrollo. La peculiar mezcla de políticas de los primeros años del gobierno de Chávez, profundamente intervencionistas unas, y sorprendentemente liberales otras, en cierto modo rebatía la conclusión simplista de que Venezuela retornaba a la dependencia de los controles gubernamentales. El país estaba buscando una nueva fórmula que le permitiera lograr un equilibrio entre las políticas

aplicadas, que aminorara la disparidad del ingreso, y al mismo tiempo estimulara la inversión y el crecimiento. La “fórmula Chávez”, prometía crecimiento con igualdad y, según sus declaraciones, parecía buscar el crecimiento a través de la continuación de las políticas macroeconómicas de sus predecesores, y la igualdad a través de cambios en las políticas microeconómicas y de la transformación del sistema político.

Esto no implicaba ninguna garantía de que el país hubiese encontrado el camino. No es lo mismo desear conseguir una ruta innovadora a la prosperidad, que conseguirla, particularmente en un entorno de cambios políticos y sociales radicales que inevitablemente provocarían mucha resistencia e incertidumbre. Incluso, en ausencia de esa turbulencia, las realidades subyacentes de la dependencia del petróleo, la volatilidad de las variables económicas básicas, la impaciencia generada por el desempleo y la pobreza, y la persistencia de la ineficiencia y la corrupción del gobierno, obstaculizarían cualquier esfuerzo que buscara colocar al sistema en una situación estable. En particular, la expectativa popular de lograr rápidamente un cambio profundo presionó al gobierno a buscar soluciones “fáciles”, haciendo promesas que serían muy difíciles de cumplir sin arriesgar la solvencia del Estado.

La búsqueda de un cambio después de años de deterioro se topó con el mismo dilema que deben afrontar los reformistas en todas partes. El estancamiento y la crisis eran problemas institucionales profundamente arraigados que exigían una transformación radical; no obstante, un cambio de ese tipo es inherentemente desestabilizador, y genera tal resistencia e incertidumbre que socava los mismos objetivos que el gobierno desea lograr. El reto del futuro será romper con el síndrome del fracaso, y restaurar la confianza del ciudadano en que el gobierno sí puede promover prosperidad, al tiempo que se reduce la pobreza y se amplían las posibilidades de toda la población.

Características tradicionales de la política económica en Venezuela

La política económica refleja el contexto institucional y social dentro del cual los países toman decisiones. Los mismos venezolanos estaban conscientes de los factores que conspiraban en contra de una política económica sólida y consistente: la toma del Estado por parte de intereses poderosos, la hegemonía partidista que impedía el cambio, la presión popular exigiendo resultados económicos a corto plazo, y un gobierno presidencialista insensible al debilitamiento progresivo de su propia legitimidad.

La estabilidad del sistema político creado en 1958 y el progresivo dominio de los principales partidos políticos, Acción Democrática (social demócrata) y COPEI (social cristiano), generaron una visión de consenso respecto a la política social y económica, limitando la aparición de modelos alternativos y creando una alianza sólida entre el gobierno y algunas élites, como la federación de cámaras empresariales (Fedecámaras), y los sindicatos más poderosos, especialmente la

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Este consenso favoreció la protección de la industria y de los trabajadores a través del proteccionismo comercial, la proliferación de industrias propiedad del Estado, subsidios, controles y una Ley del Trabajo muy amplia. De hecho, Venezuela reflejaba una organización política muy parecida a la que describe Mancur Olson en *The Rise and Decline of Nations* (1982) (El Auge y Caída de las Naciones), donde prolongados períodos de estabilidad dan pie al arraigo de coaliciones de ciertos grupos de la sociedad que instituyen políticas para favorecer sus intereses y, por lo general, socavan los esfuerzos de renovación y cambio que necesita el país para adaptarse y competir en un mundo dinámico.

Influencia de la economía petrolera

El caso de Venezuela puede muy bien demostrar cómo una democracia entra en declinación y no logra alcanzar los resultados económicos que desean los votantes. Sin embargo, un factor adicional, específico al país, contribuyó con la materialización de este fenómeno: el petróleo. La producción petrolera ha sido un factor económico importante en Venezuela casi desde principios del siglo XX, pero la misma adquirió una importancia mucho mayor después del alza espectacular de los precios del año 1973. Quizá fue posible que Venezuela lograra convertir su riqueza petrolera en un desarrollo sostenido, pero ese no fue el caso. La obsesión predominante desde, por lo menos, los años treinta se centró en la forma de evitar pasarle a los extranjeros el grueso de las sustanciales ganancias que generaba la industria de los hidrocarburos. Hasta la nacionalización de la industria en 1976, la mayoría del petróleo lo producían grandes empresas multinacionales, estando los venezolanos más que conscientes de que no tenían control de su activo más valioso. La idea expresada en los años treinta por un joven intelectual, Arturo Uslar Pietri, que Venezuela debía “sembrar el petróleo” se convirtió en el objetivo común del país entero, en el sentido de que el petróleo debía ser la semilla del desarrollo y la inversión en el futuro. Esta idea generó una ideología desarrollista positiva que impulsaría al país, primero, a incrementar los impuestos a las compañías extranjeras, segundo, a establecer causa común con otros productores de petróleo, fundando la OPEP en 1960, tercero, a crear una empresa petrolera propiedad del Estado como posible base para consolidar el conocimiento local respecto a las operaciones y la tecnología, para, finalmente, decretar la toma de toda la industria por parte del Estado.

La larga e incluso heroica lucha de Venezuela por lograr el control de su petróleo estuvo basada, fundamentalmente, en una visión del mundo que se corresponde con la de los teóricos de la dependencia de las décadas de los sesenta y setenta: el desarrollo requiere ganar autonomía frente a las corrientes económicas del mundo desarrollado; la injusticia y la desigualdad provienen, no de la incapacidad nacional de brindar igualdad de oportunidades a toda la población, sino de las asimetrías del poder; el mercado debe estar firmemente regulado por el

gobierno, de manera que el poder oligopólico no se use en contra de los intereses de los ciudadanos. En Venezuela se desarrolló un firme consenso alrededor de este conjunto de creencias. Como es de esperar, también se escucharon algunas opiniones disidentes, especialmente de los grupos empresariales que se sintieron amenazados por el crecimiento de las empresas propiedad del Estado en la mayor parte del sistema económico, pero el Estado paternalista les abrió espacio a casi todos al garantizarle mercados protegidos a las empresas privadas.

El consenso estatista

Cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1976 la ola de optimismo en el país alcanzó un nivel sin precedentes. Había un alto crecimiento económico con bajo desempleo, la inversión industrial presagiaba un nuevo futuro para la diversificación de la economía, y no existía casi ninguna duda respecto a que la nación estaba en vías de cerrar la brecha que la separaba de los países más desarrollados. A una gran cantidad de jóvenes se les enviaba a estudiar fuera para que absorbieran los conocimientos que necesitaría ese desarrollo. Todo indicaba que el consenso alcanzado sobre cómo lograr el éxito era el correcto. Sin embargo, en apenas dos o tres años, ya había suficientes pruebas de que no todo andaba bien. El crecimiento comenzó a desvanecerse, la balanza de pagos se debilitó y los precios empezaron a aumentar. Con los ocasionales auges del mercado petrolero los venezolanos se convencieron de que esos problemas eran temporales, pero la verdad es que, a fines de la década de los setenta el país comenzó un prolongado deterioro, marcado por crisis reiteradas e intentos fallidos de manejarlas. Tal como dijo Fernando Coronil (1997: 368), “El mito de Venezuela como una rica nación democrática avanzando en forma constante hacia la modernidad se mantuvo durante la década de los noventa, a pesar de los problemas que se había hecho evidentes ya desde 1978.”

A pesar del pobre desempeño económico, el consenso básico sobre la política económica y el rol del Estado petrolero de garantizar el bienestar de cada uno de los ciudadanos no se desintegró. Los dos breves períodos de liberalización, uno durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), y el otro durante la última parte del gobierno de Rafael Caldera (1996-1998), aunque resultaban prometedores en términos de recuperación económica, terminaron siendo objeto del rechazo popular en medio de llamadas al control de los mercados. La campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998 repitió la retórica tradicional de desconfianza en el mercado —el “capitalismo salvaje” en las reiteradas palabras del candidato— y llamó a restaurar el liderazgo del Estado y a reforzar el control del gobierno sobre la industria petrolera. Como veremos en este capítulo, el gobierno de Chávez no siempre aplica su propia retórica; sin embargo, su necesidad de insistir en las viejas fórmulas hostiles al mercado y a la liberalización, refleja la fuerza de la concepción popular acerca del óptimo equilibrio entre el Estado y el mercado.

Un elemento clave que el nuevo gobierno no tomó en cuenta fue su capacidad administrativa para tomar el mando del Estado y redirigir sus energías. Las buenas intenciones podrían no bastar, si la inexperiencia, la corrupción y la incompetencia obstaculizaban el camino. ¿Qué podría impedir la repetición de los mismos patrones en el gobierno de Chávez? En Venezuela, el anhelo por un cambio se había vuelto irresistible, pero era muy poco probable que el síndrome del deterioro se pudiera revertir sin llevar a cabo un cambio real en la política económica, especialmente en lo referente a mantener la estabilidad y el balance fiscal.

Historia del desempeño económico hasta 1998

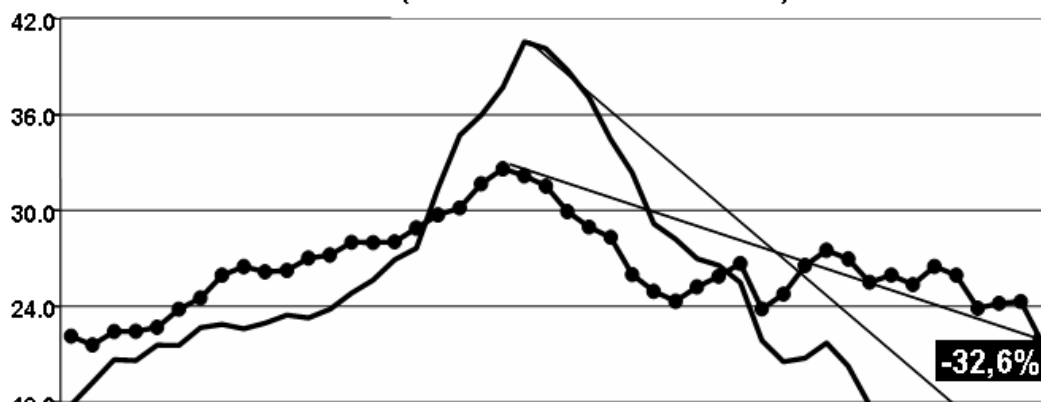
La evolución de la economía venezolana durante el período democrático siempre estuvo signada por el comportamiento de cuatro variables clave. Primero, el ingreso per cápita, después de un continuo crecimiento, se contrajo en forma sostenida y gradual desde 1979. La inflación, por su parte, tradicionalmente una de las más bajas del mundo, comenzó a subir en la década de los setenta y luego se aceleró. La tasa de cambio, que se mantuvo fija durante muchos años, después de la crisis de 1983 también reflejó un prolongado deterioro que fue reduciendo ininterrumpidamente el valor de la moneda. Finalmente, la volatilidad de los precios del petróleo desde mediados de los años setenta impuso un patrón de auge-recesión según se producían las alzas y las bajas, generando gran incertidumbre, fuga de capitales y la caída de las inversiones. Todos los esfuerzos por estabilizar estas variables y restaurar el crecimiento sostenido se enfrentaron con una resistencia popular y política, que siempre hacía que la política económica volviera a las soluciones tradicionales basadas en los controles del Estado.

Caída del ingreso per cápita

El mejor indicador para comprender el drama de la economía venezolana durante el período democrático es el comportamiento del ingreso per cápita real. Tal como muestra el Gráfico 1, éste aumentó sin interrupción durante muchos años hasta 1978, cuando comenzó a bajar en forma sostenida y progresiva. En 1999 el PIB per cápita de los venezolanos había caído a un nivel casi igual al de comienzos de los años sesenta, y el poder adquisitivo de su salario promedio era de apenas un tercio del existente en 1978.

Gráfico 1

PIB Per Cápita y Salario Real Promedio (Miles de bolívares de 1984)

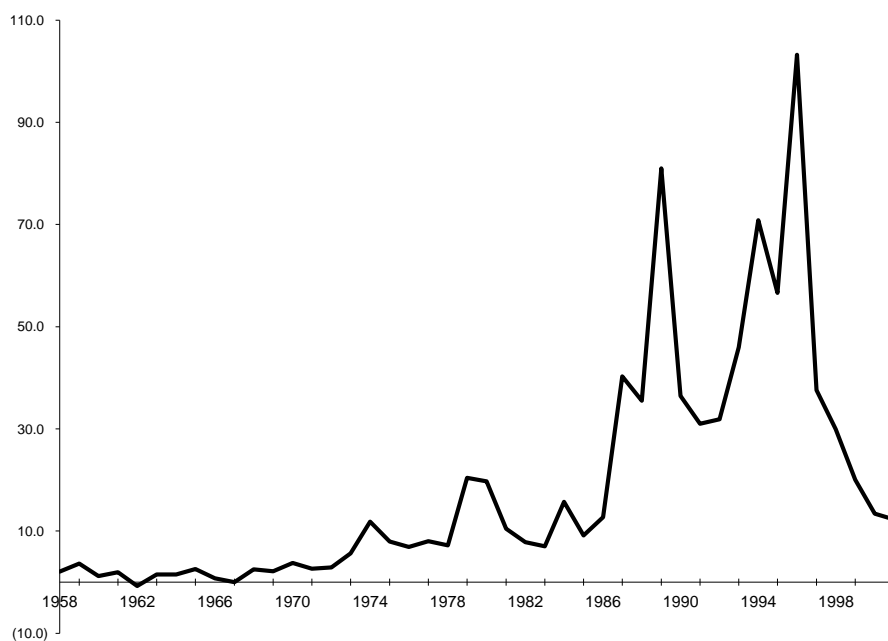


Fuente: Banco Central de Venezuela, Oficina Central de Estadística e Informática y MetroEconómica

El embate inflacionario

El comportamiento de una segunda variable, la inflación, refleja el fracaso de la política económica con igual fuerza. Venezuela, —por mucho tiempo el reino de los precios estables en América Latina, mientras otros países sufrían con frecuencia de hiperinflación o de inflación galopante— desde fines de los años setenta también enfrentó preocupantes procesos inflacionarios que tomaron por sorpresa a los ciudadanos, deteriorando el poder adquisitivo de sus salarios y generando una gran incertidumbre (Ver Gráfico 2). Ello contribuyó a que la gente tratara de proteger el valor de sus activos invirtiendo fuera del país, lo que se tradujo en situaciones reiteradas de fuga de capitales.

Gráfico 2
La inflación anual 1958-2001



Fuente: Banco Central de Venezuela.

El gráfico 2 muestra cómo durante la década de los sesenta la inflación se mantuvo en niveles muy moderados; sin embargo, con el auge petrolero de la década de los setenta, los precios comenzaron a subir algo más intensamente. En ese momento la reacción fue simplemente establecer controles de precios sobre los bienes y servicios básicos, especialmente los que más afectaban al consumidor,

como alimentos y alquileres y, por supuesto, los servicios públicos, como el teléfono, la electricidad y similares. Incluso, se favoreció al productor, ya que los precios de los insumos producidos por empresas del Estado —acero, energía, cemento y fertilizantes— se mantuvieron moderados. Sin embargo, bajos precios también implicaban bajas tasas de retorno, haciendo que los empresarios presionaran para obtener protección frente a importaciones baratas, tener acceso a créditos a bajos intereses y ampliar la gama de insumos subsidiados. El gobierno, por lo general, los complacía, a menudo absorbiendo las pérdidas de las empresas públicas que necesitaban constantes inyecciones de capital por parte del Estado. En muchos casos las crecientes necesidades de gasto que esto generaba se financiaron con endeudamiento foráneo, dada la alta disponibilidad de crédito externo con que contaba Venezuela.

Pérdida de control sobre el tipo de cambio

Ningún país puede mantener una tasa de cambio fija a largo plazo si su tasa de inflación difiere en forma significativa de la de sus socios comerciales, ya que esto genera una sobrevaluación de la moneda, abaratando los productos importados y deteriorando la balanza comercial y la capacidad competitiva de los productores locales. A su vez, esto crea expectativas de devaluación y fuga de capitales cuando la gente trata de proteger el valor de sus activos. Si, además, el país acumula deuda externa, la incertidumbre acerca de su capacidad de cumplir esas obligaciones potencia el problema. Al final, la devaluación se hace inevitable, aunque a menudo los gobiernos tratan de retardar el momento de la verdad implementando políticas monetarias restrictivas y sacrificando las reservas internacionales. En Venezuela, este ciclo comenzó con la inflación de finales de la década de los setenta y se siguió repitiendo a través de las décadas de los ochenta y noventa. Venezuela mantuvo una tasa de cambio fija durante varias décadas hasta 1983, cuando se devaluó el bolívar para algunas transacciones externas, y se establecieron controles cambiarios que estuvieron vigentes hasta principios de 1989. A pesar de los esfuerzos por volver a la estabilidad, el ciclo inflación-devaluación resultó muy difícil de romper, especialmente cuando los precios del petróleo bajaban.

Tabla No. 1

Tasas de Cambio 1982-2001
(bolívares por dólar, cierre del año)

Año	Bs/\$	Tasa de Depreciación (%)
1982	4,30	
1983	10,87	152,8
1984	12,10	11,3

1985	13,80	14,0
1986	22,20	60,9
1987	28,20	27,0
1988	34,02	20,6
1989	43,79	28,7
1990	50,79	16,0
1991	61,63	21,3
1992	79,60	29,2
1993	106,00	33,2
1994	215,33	103,1
1995	334,12	55,2
1996	476,75	42,7
1997	504,25	5,8
1998	564,50	11,9
1999	648,25	14,8
2000	699,75	7,9
2001	763,00	9,0

Fuente: Banco Central de Venezuela y MetroEconómica. La tasa de cambio indicada se refiere al valor estimado al cierre del año en el mercado libre, incluyendo los períodos de control de cambios.

La depreciación constante del bolívar constituyó la evidencia externa de los fracasos económicos del régimen democrático en Venezuela.

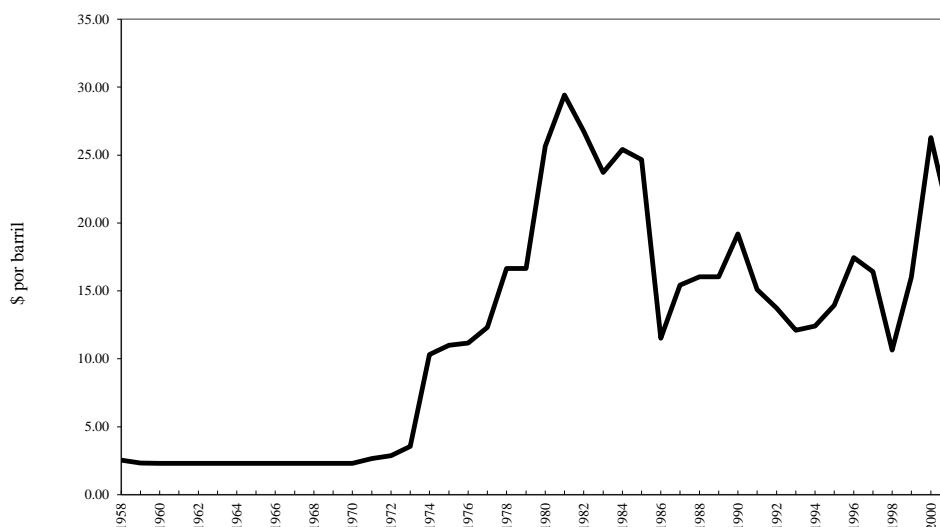
Volatilidad del ingreso petrolero

Formular políticas económicas nunca resulta fácil; son muchos los factores que conspiran para frustrar los planes más cuidadosos y, como hemos visto, muy a menudo los políticos prefieren sacrificar la salud de la economía a largo plazo en aras de los beneficios a corto plazo. En Venezuela, el problema de la política económica se potencia por el gran impacto que tienen los precios del petróleo en el resto de la economía. Los gobiernos venezolanos siempre han caído en la tentación de gastar demasiado cuando el precio del petróleo está alto, sin ahorrar para el momento inevitable en que la tendencia positiva se revierte.¹ Los costos de la volatilidad son considerables. Según un estudio llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1995), mientras más volátil es una economía, menor será su crecimiento en el tiempo. Esto se debe, en especial, a los efectos negativos de la volatilidad sobre el nivel de certidumbre, que desalientan la inversión y hacen que la toma de decisiones a largo plazo implique grandes riesgos. Según la teoría del manejo económico bajo condiciones de incertidumbre, las políticas públicas deberían estar diseñadas para allanar estas irregularidades (Newbery y Stiglitz, 1981).

Tal como indica el Gráfico 3, después de 1973 el precio del petróleo venezolano ha mostrado un comportamiento de extrema inestabilidad. Así, la

guerra en el Medio Oriente, la revolución en Irán y la invasión a Kuwait generaron grandes picos en los precios del petróleo en 1973-1974, en 1979-1980 y en 1991, respectivamente. Por el contrario, el deterioro económico de los países industrializados hizo que los precios bajaran al caer la demanda; la crisis asiática también ayudó al exagerado deterioro del mercado petrolero de 1998. Con cada uno de estos cambios en el mercado, Venezuela sufrió graves altibajos.

Gráfico 3
El precio del petróleo venezolano
1958-2000
(dólares por barril)



Fuente: Ministerio de Energía y Minas

A principios de la década de los noventa, bajo el régimen liberal de Carlos Andrés Pérez, la necesidad de establecer un fondo de estabilización que funcionara adecuadamente figuró en la agenda pública, pero las presiones políticas impidieron su aprobación y materialización. Sin embargo, la idea quedó en el ambiente y el gobierno de Rafael Caldera, castigado por su propia experiencia con la caída de los precios de 1998, decidió aprobar la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), cuyo único objetivo era garantizar la regularización del gasto público con el fin de evitar la repetida práctica de los gobiernos de gastar más en las épocas de abundancia para encontrarse sin recursos en las épocas de escasez. Este fondo no se creó con el tiempo suficiente como para dejar un colchón de ahorros para la siguiente caída de los precios de petróleo, por lo que el recién instaurado régimen de Chávez se encontró con un margen muy pequeño para enfrentar la histórica caída de precios de principios de 1999. De allí en adelante,

con la recuperación de los precios a nivel mundial, los ahorros se acumularon en el fondo y sirvieron de colchón para la baja de 2001-2002.

Caída del régimen “puntofijista”

La primera crisis, 1983-1988

La combinación de un mercado petrolero debilitado, el alto nivel de importaciones generado por la sobrevaluación del bolívar, la fuga masiva de capitales, el estallido de la crisis de la deuda y la falta de una política económica sólida, llevaron a una crisis en febrero de 1983 que el gobierno no pudo controlar². Su reacción fue imponer un sistema de control de cambios y de precios que luego se mantendría durante todo el gobierno de Jaime Lusinchi, hasta 1989. Esto marcó el fin del sistema de tasa de cambio fija que había prevalecido durante varias décadas. Estos controles, que generaron niveles de corrupción sin precedentes, le permitieron al gobierno satisfacer a consumidores y a productores, ya que, normalmente, los controles constituyen un subsidio implícito para todos.

A pesar de que la volatilidad que se produjo a raíz de esta política indicaba que el patrón deuda-protección-subsidios era insostenible, no fue sino hasta 1989 que el país tuvo que afrontar la realidad. El ingreso petrolero simplemente no podía cubrir el costo de mantener una economía artificial, no habiendo recursos suficientes con que pagar los compromisos en moneda extranjera. Aún así, en la elección presidencial de 1988 los votantes escogieron a Carlos Andrés Pérez como presidente por segunda vez, sin sospechar la crisis que estallaría de nuevo.

El corto experimento de liberalización de Carlos Andrés Pérez

Pérez asumió la presidencia en febrero de 1989 al lograr una cómoda victoria, pero su popularidad no duró mucho. En otro capítulo de este libro se cuenta la historia de los sangrientos disturbios que estremecieron al país poco después de la toma de posesión. Los anuncios de inevitables aumentos de precios, combinados con los problemas de desabastecimiento que se venían presentando, tuvieron hondas repercusiones en la población, la cual reaccionó en forma violenta e incontrolada.³

Los graves desequilibrios que padecía la economía, y la escasez crítica de recursos para afrontar la situación, forzaron a Pérez a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional, teniendo que aceptar sus condiciones, según las cuales era necesario aplicar un extenso programa de estabilización, que implicaba, entre otras cosas, la drástica reversión de las políticas intervencionistas aplicadas durante años. Su equipo de tecnócratas, convencido de que el país debía romper su patrón de subsidios y de dependencia del ingreso petrolero, sentó las pautas para ello. Los precios se debían liberar, se tenían que eliminar los controles cambiarios y unificar el tipo de cambio, tasa que se debía ajustar con regularidad para evitar la sobrevaluación de la moneda, se debía reducir el proteccionismo al sector productivo local, y aceptar las reglas de comercio internacional establecidas por el

GATT (luego Organización Mundial de Comercio), así como privatizar las empresas públicas no rentables.

Como era de esperar, los impactos iniciales del programa de reformas fueron severos, teniendo esto consecuencias políticas muy negativas. En 1989, el ingreso real cayó bruscamente y la inflación se disparó a más de 80%, inmediatamente después de la eliminación de los controles de precios y cambiarios, y de la devaluación masiva del bolívar producida por la eliminación del mercado oficial de divisas con el fin de unificar el tipo de cambio al nivel existente en el mercado libre. Cuando volvió la recuperación —la economía creció un 4,4% en 1990, 9,7% en 1991 y 6,7% en 1992— se le dio muy poco crédito a un gobierno que había llevado a cabo un ajuste tan violento en 1989.

Adicionalmente, la reducción de los aranceles generó resentimiento en muchos empresarios que se veían amenazados por la competencia externa. Los grupos de oposición retrasaron o bloquearon la aprobación de algunos elementos clave del programa de reformas, como, por ejemplo, la instauración del impuesto al valor agregado que ayudaría a equilibrar las cuentas fiscales, y una reforma financiera cuyo objetivo era aumentar la competitividad del sistema bancario y otorgar una mayor autonomía al Banco Central. Igualmente, la reforma de la Ley del Trabajo, que debía constituir un paso hacia la reducción de las distorsiones en los salarios, fue sabotada en el Congreso. El gobierno tampoco logró ningún avance en la modernización del sistema de seguridad social, que estaba en una situación financiera precaria, y que era de muy mala calidad, tanto en lo que se refiere a las pensiones, como a los servicios de salud.

Es imposible decir qué podría haber sucedido en Venezuela si no se hubieran dado dos conatos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992. Sin embargo, lo que no se puede negar es que la inestabilidad política de ese año contribuyó a debilitar la economía venezolana. El gobierno siguió luchando por sus reformas, pero cada vez con menos capacidad, al punto de que las presiones políticas forzaron al Presidente a incluir en su gabinete a personas que se oponían a sus políticas neoliberales, y a ceder a las exigencias de cancelar algunas de sus reformas, como el impopular aumento del precio de la gasolina. La privatización también generó discordias, especialmente la venta de la compañía telefónica, CANTV, que pasó a un consorcio liderado por GTE (hoy Verizon). Esta privatización no se reconoció como un gran éxito sino mucho después que Pérez dejó la presidencia.

La ruta a otra crisis: Caldera y el colapso del sistema bancario

A pesar de la excelente trayectoria del crecimiento económico entre 1990 y 1992, había problemas muy graves que azotaban a la economía venezolana. En particular, la inflación no estaba en modo alguno bajo control. En 1992 los precios aumentaron en casi un 32% y en 1993 en 46%. Algunos argumentaban que lo que alimentaba el proceso inflacionario era una política del gobierno de Pérez, que

continuó el gobierno interino de su sucesor, el presidente Ramón J. Velásquez: mantener una depreciación continua del bolívar bajo una figura de mini devaluaciones periódicas, o “crawling peg”. Alentado por el Fondo Monetario Internacional, el economista jefe y ministro de Planificación de Pérez, Miguel Rodríguez, defendió esta estrategia como la mejor manera de permitir que la economía saliera de la dependencia del petróleo, permitiendo que los exportadores contaran con un entorno competitivo para desarrollar industrias alternas y limitar el exceso de importaciones. Por lo tanto, si en Venezuela los precios estaban subiendo, la moneda se debía depreciar al menos en un monto cercano a la inflación. Entre 1989 y 1993, la moneda pasó de 43 bolívares por dólar a 106 bolívares por dólar. (Ver Tabla 1).

El problema con la devaluación es que la misma tiene un impacto directo sobre la inflación, especialmente en Venezuela, donde las importaciones y su costo constituyen una parte vital del sistema económico. Por ende, cualquier devaluación aumenta de inmediato el precio de las importaciones y, en tanto estas importaciones no tengan un sustituto fácil que se produzca internamente, los precios en Venezuela aumentan. Naturalmente, cuando la mercancía importada se encarece, la tendencia es que todos los precios aumenten con el tiempo, ya que hasta el barbero desea aumentar el precio del corte de pelo para poder pagar los alimentos importados o la televisión importada. En muchos países la devaluación estimula la demanda extranjera de sus productos, aumentando así sus exportaciones, pero en Venezuela este efecto es menor, ya que el precio del petróleo se fija en dólares en los mercados internacionales y la devaluación no lo afecta. Es más, después de una devaluación, el ingreso petrolero en dólares se convierte en más bolívares, de manera que, en realidad, el gobierno puede gastar mucho más a causa del aumento de los ingresos fiscales provenientes de la exportación de petróleo. Por estas razones, la devaluación en Venezuela tiende a tener efectos inflacionarios. De allí la importancia de mantener baja la inflación por medio de la disciplina monetaria y fiscal para minimizar la necesidad de depreciar la moneda.

La incertidumbre política, aunada a los precios más bajos del petróleo en 1993, potenciaron los problemas económicos. Ese año, Velásquez, siendo presidente interino, logró la aprobación de un moderado impuesto al valor agregado, que parecía indicar que Venezuela estaba finalmente tomando en serio el aumento de los impuestos, y colocando las finanzas gubernamentales sobre una base más sólida. Pero este tributo generó un rechazo muy amplio, que Caldera, siendo candidato presidencial, aprovechó para ganar popularidad a través de prometer su abolición. En lugar de plantear una política seria, balanceada y responsable, Caldera envió el mensaje de que los problemas de Venezuela no se habían superado y que se podían esperar nuevos desequilibrios en el futuro.

Después de ganar popularidad en 1992, cuando convalidó las críticas populares a las políticas liberales de Pérez, Caldera prometió que, de ser elegido

en las elecciones de diciembre de 1993, revertiría la política de libre mercado, sustituyéndola por otra más justa. Si bien nunca quedó del todo claro en qué consistía esa nueva política, el título del programa de gobierno que proponía: “Carta de Intención con el Pueblo Venezolano”, daba una clara idea de su orientación populista, contraria a los planteamientos del FMI. Los votantes respondieron positivamente, eligiendo a Caldera para un segundo período presidencial.

Estas promesas de política económica, combinadas con el debilitamiento de los precios del petróleo, con el repunte de la inflación, con la recesión económica y con la crisis política que se vivía, desintegraron la confianza de los agentes económicos en 1993, generando enormes fugas de capital, que obligaron al Banco Central a implantar una política monetaria muy restrictiva.⁴ Las tasas de interés sobre los préstamos de la banca comercial se dispararon a más de 80%, lo que implicaba una tasa real de 40% o 50%. Esto creó una situación insostenible ya que, por una parte, ningún negocio podía generar beneficios suficientes para pagar esos intereses y, por la otra, los bancos se vieron obligados a ofrecerle a los depositantes tasas de interés suficientes como para convencerlos de dejar su dinero en Venezuela. La crisis bancaria se ponía en marcha, justo cuando se estaba eligiendo a un nuevo gobierno que no estaba preparado para manejar la amenaza del colapso de buena parte del sistema financiero.

Nuevamente, el inadecuado manejo de lo económico y la incertidumbre política lanzaron al país en una espiral descendente. En lugar de tratar de evitar una crisis bancaria a través de la intervención del Banco Latino a puertas abiertas, acompañándola con acciones y mensajes tranquilizadores que buscaran evitar el pánico de los depositantes, el gobierno cerró el banco a mediados de enero de 1994, dando esto inicio a una crisis financiera de grandes proporciones. La presidenta del Banco Central, en desacuerdo con el manejo gubernamental de la situación, renunció. La reapertura del Banco Latino y las medidas de rescate a través de los auxilios financieros no lograron frenar las quiebras de otras instituciones financieras, inyectándose enormes cantidades de liquidez al sistema monetario, que estimularon aún más la fuga de capitales. La situación llevó de nuevo al establecimiento de severos controles de cambio a mediados de 1994, manteniéndose éstos en vigencia hasta 1996. Adicionalmente, en los dos primeros años del gobierno de Caldera se produjeron acontecimientos económicos muy negativos, entre los que destacan la acentuada depreciación del bolívar en el mercado libre de divisas, y una inflación creciente, que a comienzos de 1996 alcanzó un nivel de 150% en términos anuales.

La corrección de Caldera y el segundo experimento liberal de 1996-1998

Las políticas del presidente Caldera de regresar al crecimiento económico centrado en el Estado fallaron dramáticamente. A fines de 1995, con su popularidad en el punto histórico más bajo (el 57 por ciento de la población expresó que tenía poca o ninguna confianza en su capacidad para manejar el país; Datos, 1995),

Caldera se enfrentó a un dilema parecido al del presidente Pérez en 1989: aceptar la única alternativa disponible, la de emprender un programa de severos ajustes, o continuar con una estrategia que había fracasado. La frase acuñada por voceros del gobierno de Caldera: “Estamos mal, pero vamos bien” sirvió para lograr la paciencia pública respecto a un cambio de política que los votantes prácticamente no entendían, después de haberle dado su confianza a un líder de quien pensaban recibir algo distinto.

Esta segunda ronda de políticas incluyó un aspecto aún más audaz que las emprendidas por Carlos Andrés Pérez. Convencido por Luis Giusti, el carismático presidente de PDVSA, Caldera aprobó el proceso de apertura de la industria petrolera a inversiones privadas en forma controlada, por primera vez después de la nacionalización de la industria en los años setenta. También dejó un poco de lado la lealtad de Venezuela para con la OPEP al lanzar un plan de franca expansión de la producción petrolera y ambiciosos programas de inversión en nueva capacidad para el futuro. PDVSA diseñó un plan de diez años que, de haber sido implementado, habría duplicado la producción para el 2006.

A mediados de 1996, después de una masiva devaluación del bolívar —el tipo de cambio controlado pasó de Bs/\$ 170 en diciembre de 1995 a Bs/\$ 470 en abril de 1996— se eliminaron los controles y se unificó el tipo de cambio, pasándose a un sistema de bandas según el cual la tasa de cambio fluctuaría en torno a una paridad central, pero dentro de una franja definida por un límite superior y uno inferior. El gobierno había llegado a la conclusión que las devaluaciones no eran parte de la solución, sino más bien parte del problema, por lo que decidió tratar de limitar la tasa de depreciación de la moneda, manteniéndola muy por debajo de la tasa de inflación, de manera que actuase como un freno respecto a los precios. La inflación comenzó a ceder, pero se mantuvo bastante por encima de las de los socios comerciales de Venezuela, generándose así una apreciación sostenida de la moneda que desembocó en una sobrevaluación creciente del bolívar comercial, llegando ésta a más del 35% a fines de 1998.

El surgimiento de la Quinta República

La campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998 dejó a muchos observadores a oscuras respecto al tipo de política económica que él prefería. De hecho, muchas veces se expresaba vagamente acerca de sus intenciones específicas, lo que sólo aumentaba la incertidumbre. Las expectativas respecto a su presidencia se limitaron en gran medida a la especulación sobre las orientaciones de sus colaboradores más cercanos, muchos de los cuales venían de la izquierda venezolana.

Pensamiento económico

El grupo más importante de los asesores de Hugo Chávez en asuntos económicos reflejaba el pensamiento del profesor Jorge Giordani, de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Giordani era la pieza central de un círculo llamado el

“Grupo Garibaldi”, entre cuyos miembros se encontraban futuros ministros como José Rojas (Finanzas), J.J. Montilla (Producción y Comercio) y Héctor Navarro (Educación). El propio Giordani se convirtió en ministro de Planificación, un cargo desde donde ejercería una influencia considerable sobre el Presidente y el Gabinete. El grupo Garibaldi, sin experiencia práctica en política, compartía la hostilidad del Presidente hacia las políticas liberalizadoras ejecutadas tanto por Carlos Andrés Pérez, como por Rafael Caldera. Este grupo se enorgullecía de ofrecer una ruta alternativa al desarrollo, una ruta que contrastaba con los enfoques liberales, o “neoliberales”, defendidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por extensión, los Estados Unidos. El grupo Garibaldi era socialista, con poca intención de hacer experimentos reformistas con las fuerzas del mercado. Obviamente, su predominio despertó dudas en la comunidad empresarial sobre lo que podría venir.

Chávez también gozó del apoyo del sector militar, en el que el nacionalismo económico tiende a imperar como componente de la doctrina de seguridad nacional, aunque ciertamente existen diferencias entre los distintos oficiales. Cabe mencionar a Francisco Arias Cárdenas, antiguo compañero de armas de Chávez, que se convirtió en su rival y se lanzó como candidato en su contra durante la campaña presidencial del año 2000, quien presentó una plataforma que lo colocó en el campo liberal, con el apoyo natural de importantes intereses empresariales. Luego se supo que el MBR-200, grupo original que incluía a todos los conspiradores del golpe de febrero de 1992, desde hacía mucho tiempo tenía contactos con el viejo liderazgo de la guerrilla de los años sesenta a través de la intermediación de Adán Chávez, hermano del futuro presidente (Garrido, 1999).

Durante la campaña se ignoraba gran parte de la historia del círculo más cercano a Chávez, y hasta definir al mismo Chávez era todo un reto. Uno de los mejores recuentos de sus ideas, una serie de largas entrevistas realizadas por Agustín Blanco Muñoz y publicadas en el año 1998, refleja a Chávez como una persona que toma prestadas ideas de cualquier fuente que le llame la atención. Trató de presentarse como una persona que quería construir una posición original venezolana, en base a personajes históricos como Simón Bolívar, Ezequiel Zamora (un populista del siglo XIX) y Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Como Bolívar era aristócrata, y Zamora un rebelde populista que le prometió tierras a los campesinos, no resultaba nada claro lo que pensaba Chávez.

El candidato, al hablar de sus planes, pocas veces se extendía más allá del nivel de las generalidades. Sus intereses se concentraban más en el cambio político que en los programas económicos. Sus palabras le sonaban vagamente amenazantes a la comunidad empresarial, y a muchos que pensaban que Venezuela necesitaba menos intervención del Estado en su economía y una normativa más moderna y eficiente. Los optimistas llegaron a creer que muy pronto Chávez se daría cuenta de cuán imprácticas resultaban sus ideas, por lo que, la

mejor estrategia que se podía seguir era, según ellos, tratar de tener contacto con el candidato con el fin de explicarle lo que en realidad significa manejar una economía.

La Quinta República se define a sí misma

El primer semestre: Precaución económica

¿A qué se parecería la política económica de Chávez? El gobierno enfrentaba dos problemas que restringían su libertad para ejecutar políticas significativas. Primero, al final del gobierno de Caldera el precio del petróleo había llegado a su nivel más bajo en años. Segundo, había mucho ruido en torno a la campaña presidencial y a los reportes sobre la retórica incendiaria del candidato en contra del “capitalismo salvaje” y de las políticas neoliberales, junto con sus referencias al problema de la deuda externa —que con el tiempo se fueron moderando cada vez más— lo que generó expectativas pesimistas en la comunidad financiera nacional e internacional. Chávez mostró primero su lado pragmático, confirmando en ese cargo a la ministra de Finanzas del presidente Caldera, la demócratacristiana Maritza Izaguirre. Esto fue una señal innegable de que Chávez estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para calmar los mercados y señalarles que no había peligro. El Fondo de Estabilización Macroeconómica fue confirmado como política gubernamental. La presencia de Izaguirre también garantizó la continuidad de la política cambiaria de Caldera que permitía flexibilidad mientras trataba de minimizar la depreciación de la moneda con fines antiinflacionarios.

El problema del mercado petrolero era crítico. A principios de 1998, la producción de petróleo (excluyendo el gas) había llegado a 3,3 millones de barriles por día, un nivel que había ido aumentando paulatinamente desde comienzos de la década de los noventa cuando el promedio era cercano a 2 millones de barriles diarios. Como ya se dijo, el plan de PDVSA tenía previsto duplicar la producción, para llevarla a 5,7 millones de barriles por día en el año 2006, y contemplaba que los inversionistas extranjeros generarían cerca del 28% de esa producción bajo los nuevos acuerdos de asociaciones entre PDVSA y las compañías privadas. Era una política audaz para ganar mayor participación en el mercado mundial, pero 1998 fue un año de poca demanda y, aparentemente, de poca tolerancia a esa política por parte de Arabia Saudita, el miembro más poderoso de la OPEP, que estaba dispuesto a dejar caer los precios para castigar a Venezuela (Morse y Richard, 2002). La reacción de cooperación por parte de la OPEP llegó muy tarde para evitar el colapso del mercado petrolero.

Los economistas predijeron que si el precio del petróleo se mantenía por debajo de \$10 por barril en 1999, el déficit fiscal sería enorme, con la consiguiente posibilidad de una importante pérdida de control. Chávez decía que la culpa de la caída de los precios mundiales la tenía la política venezolana de expandir las actividades de exploración y producción bajo el ambicioso plan desarrollado por

Giusti y sus predecesores. A pesar de que el gobierno de Caldera ya había reconocido el problema, por lo que desaceleró el plan de expansión y redujo la producción en más de medio millón de barriles, en 1998 se llegó a los precios reales de exportación más bajos desde principios de la década de los '70 (ver Gráfico 3), mientras se alcanzaba la producción más alta de todo ese período⁵.

Giusti renunció apenas unos días antes de que Chávez se juramentara. Roberto Mandini, experimentado ejecutivo petrolero que había estado en desacuerdo con Giusti respecto a otros asuntos ajenos a la estrategia de mercado de la compañía, fue designado nuevo presidente de PDVSA. Chávez también nombró a un prominente crítico de Giusti, Alí Rodríguez, ministro de Energía y Minas, con la misión de llevar con firmeza a PDVSA hasta colocarla bajo el control del gobierno. En la OPEP seguían las negociaciones para lograr el acuerdo de todos sus miembros con el fin de apuntalar los precios a través de nuevas reducciones de la producción. Los planes de expansión se congelaron y Venezuela tuvo un fuerte rol de liderazgo al lograr la unidad entre aquellos miembros de la OPEP cuya producción con frecuencia había estado por encima de las cuotas convenidas (incluyendo a Venezuela).

La mayor demanda de petróleo resultante de la recuperación de los países asiáticos, combinada con la menor oferta existente, hizo que los precios se recuperaran en un lapso relativamente corto. En febrero de 1999, mes en el que Chávez asumió la presidencia, el petróleo venezolano tenía un precio muy bajo — \$ 8,43 por barril— subiendo luego en forma sostenida hasta llegar a \$22,77 en diciembre. En marzo de 2000, la OPEP decretó otro recorte de producción, bajando la cuota venezolana a 2,7 millones de barriles diarios, y reduciendo la producción total de los países de la OPEP a 23 millones de barriles por día. De allí en adelante, el mercado se fortaleció y la OPEP pudo incrementar de nuevo la producción, al menos hasta finales de 2000, cuando Venezuela pudo producir 3 millones de barriles al día. En enero de 2001, surgió de nuevo la preocupación sobre una posible recesión en los Estados Unidos que podría frenar la demanda mundial, y los precios empezaron a bajar. La OPEP redujo de nuevo la producción los días 17 de enero y 17 de marzo, lo que dejó la cuota de Venezuela en 2,8 millones de barriles por día.

Durante los primeros meses del gobierno de Chávez, nadie estaba seguro de que el precio se recuperaría como lo hizo, y se necesitaba una medida extrema para evitar la materialización de un déficit fiscal desproporcionado e inmanejable. Este fue un momento crítico para una administración que nunca había sido puesta a prueba. Quizá, en un gobierno más consolidado una brecha de ese tipo se podría cubrir con préstamos externos, partiendo de la base de que el problema era transitorio y que tenía pocas probabilidades de extenderse. Sin embargo, para Chávez esa opción prácticamente no existía. La desconfianza que había generado en los mercados internacionales llevó a que pareciera poco atractivo concederle algún préstamo. Su equipo económico, quizá a excepción de la ministra de

Finanzas, Maritza Izaguirre, no logró impresionar a los banqueros e inversionistas, entre otras razones por que dentro de ese equipo había muchos recién llegados sin ninguna experiencia en el manejo de crisis económicas. Además, sobre el país pendía una interrogante a consecuencia del anuncio del Presidente de que convocaría una Asamblea Constituyente para reacondicionar el sistema político y económico; esto podría generar resultados muy negativos para la economía, si se hacían realidad los peores pronósticos acerca de la orientación ideológica de Chávez.

Fue en esta coyuntura que el nuevo presidente dio algunas sorpresas. Para demostrar que no era un demagogo irresponsable, anunció una serie de acciones diseñadas para ganarse la confianza. Durante la primera mitad de 1999, el Congreso sancionó una Ley Habilitante que le otorgaba al Presidente amplias facultades de decreto para manejar la emergencia. Rápidamente se tomaron las siguientes medidas:

- Se estableció oficialmente el impuesto al valor agregado en 15,5%, bajando la tasa en un punto porcentual respecto al impuesto a las ventas al mayor que reemplazaba.
- Se impuso un impuesto de emergencia de 0,75% a las transacciones financieras.
- Se redujo el presupuesto en todos sus rubros en más de un 7%.
- En mayo, el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) creado por el gobierno anterior se convirtió en el Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), que fundamentó la norma de ahorro en un precio de petróleo base muy conservador de \$ 9 por barril.

Con el desempleo en aumento y una economía en recesión, el gobierno acompañó estas medidas con acciones diseñadas para aliviar la situación social en deterioro. Además, el presidente Chávez decidió apoyar acciones de emergencia adicionales por parte de las Fuerzas Armadas, a través de un proyecto denominado Plan Bolívar 2000, en el que el personal militar prestaría directamente sus servicios en las áreas más pobres, buscándose aliviar el desempleo con la contratación a corto plazo de civiles para algunas de las operaciones.

De esta forma el gobierno trató de combinar las severas políticas macroeconómicas con programas directos para los pobres, complementando su estrategia con una constante presencia del Presidente en los medios, haciendo reiterados llamados para que la gente tuviese paciencia. Chávez fue lo suficientemente convincente como para mantener su alta popularidad a pesar de las malas condiciones económicas. De hecho, planteaba en forma insistente que el problema era el resultado de los “cuarenta años” de dominio corrupto de los partidos tradicionales, malas políticas petroleras y la inhumana ideología neoliberal. Esta

retórica, además de la promesa de acción social orientada a los pobres, fue suficiente para aminorar la posible resistencia a las medidas restrictivas que se anunciaban.

Aunque Chávez sorprendió a muchos con su acción decisiva, esto no bastó para ganarse la aprobación en el extranjero, donde su retórica anti mercado seguía generando dudas. Para enviar otro mensaje positivo a los Estados Unidos el Presidente dio luz verde a la aprobación de un tratado bilateral de tributación con ese país, a pesar de las dudas de sus seguidores más radicales. A lo que no llegó, sin embargo, fue a culminar las negociaciones del Tratado Bilateral de Inversión con los Estados Unidos, aunque aprobó una nueva ley para la protección de la inversión extranjera que ofrecía seguridad al capital foráneo. En junio de 1999 Chávez visitó Nueva York y Houston, reuniéndose con los líderes financieros y de la industria petrolera, con la clara intención de comunicarles su firme disposición a hacer negocios.

Otro elemento de continuidad fue la política cambiaria, similar a la implantada por Caldera desde mediados de 1996. Esta política fue controversial —muchas empresas se quejaron de que los altos niveles de importación estimulados por la sobrevaluación del bolívar les habían generado situaciones difíciles— pero el nuevo gobierno decidió que su mayor prioridad era controlar la inflación. Desde un nivel de 30% en 1998, la inflación cayó a 20% en 1999, todavía muy alta según los estándares mundiales, pero una mejoría importante desde el punto de vista del consumidor. El argumento de los críticos era que la inflación estaba retrocediendo sólo a causa de la recesión, y que más adelante el país pagaría el precio de la creciente sobrevaluación del bolívar. Pero no hay duda de que el gobierno cosechó beneficios políticos de esta medida, la cual continuó moderando la inflación por dos años más.

El segundo semestre: la Asamblea Constituyente y la economía de Chávez

En su campaña presidencial Chávez prometió una nueva Constitución, y el día de su toma de posesión juró seguir adelante con su idea de convocar una Asamblea Constituyente. En 1999, a medida que fue avanzando la organización de la misma, afloraron muchos temores respecto a las posibilidades de que los asambleístas recién electos redactaran una constitución que confirmara las ideas económicas de Chávez y de sus colaboradores. Algunas informaciones parecían apuntar en esa dirección al ir emergiendo las propuestas de algunos de sus seguidores más radicales (Kelly, 2000). Entre los asambleístas del MVR, partido de Chávez que ganó por aplastante mayoría en la Asamblea Constituyente, había algunos que, sin duda, votarían por una Constitución que redujera el rol del mercado y ampliara la influencia del Estado.

Cuando la Asamblea Constituyente comenzó su tarea el 5 de agosto, el presidente Chávez le presentó un proyecto de constitución con los conceptos que él les sugería y que había redactado con el apoyo de una comisión que él mismo

había nombrado.⁶ Aunque el documento contenía algunos artículos controversiales que generaron una rápida reacción de los sectores empresariales, también ayudó a disipar muchas dudas, ya que sus cláusulas económicas reflejaban pocas diferencias con los enfoques estatistas tradicionales del pasado. En cualquier caso, la versión definitiva de la constitución⁷ apenas si confirmaba el argumento de que el gobierno pensaba socializar la economía, o diferenciarse en gran medida de las estrategias económicas de las últimas décadas. .

El debate previo al referéndum popular para la aprobación de la constitución fue corto, ya que el gobierno estaba resuelto a poner fin a ese proceso que resultaba algo caótico. Por tal motivo, el referéndum se fijó para el día 15 de diciembre de 1999, menos de un mes después de haberse terminado de redactar el proyecto de constitución. La principal oposición al documento vino de Fedecámaras, la organización cúpula del empresariado. Dado que el proyecto tenía grandes probabilidades de ser aprobado por un electorado que todavía apoyaba al gobierno por una aplastante mayoría, algunos pensaron que la oposición abierta del empresariado era muy arriesgada y podía perjudicar las relaciones empresariado-gobierno en el futuro. De hecho, el presidente Chávez comenzó a ver a las élites empresariales como enemigas y éstas, con algunas excepciones, le devolvieron el favor. Este conflicto se acrecentó hasta los violentos acontecimientos de abril de 2002, para cuando ya se había establecido una formidable alianza entre Fedecámaras y los sindicatos, los trabajadores petroleros, los defensores de los derechos humanos y una gran cantidad de ciudadanos comunes.

A diferencia de la oposición de Fedecámaras, otros intereses económicos fueron más circunspectos al expresar sus dudas. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) emitió un informe analítico de la constitución en el que se evitó formular opiniones políticas,⁸ y el embajador americano John Maisto expresó en privado la visión de que “la revolución” no implicaba ningún riesgo en particular para los inversionistas internacionales.

El año 2000: ¿la normalidad o algo nuevo?

El cierre del debate acerca de la constitución brindó una cierta estabilidad política, pudiendo el gobierno ocuparse de la recuperación económica a partir de comienzos del 2000. El presupuesto, severamente restringido ese año, se podía ampliar y de hecho el gobierno propuso un aumento del gasto de 13% en términos reales. Al aumentar los precios del petróleo, también aumentaron los planes de gasto. Incluso, Chávez solicitó autorización para incrementar las erogaciones aún más a través de créditos adicionales; sin embargo, al cierre del año se evidenció que el ejecutivo no había sido capaz de ejecutar la totalidad del presupuesto de gastos (Bs. 23,6 billones), habiendo desembolsado Bs 20,7 billones, equivalente al 21,4% del PIB. El déficit de ese año equivalió al 1,8% del PIB.

En el año 2000 la actividad económica creció en términos reales a una tasa de 3,5% una mejora substancial con respecto a la contracción de -6,1% de 1999.

La inflación, por su parte, siguió bajando, nivelándose en 13,4% al cierre del año. Lo que más preocupaba a los analistas, a pesar de la visible mejora en todos los indicadores, era la dependencia que tenía la estrategia económica del gobierno en la solidez del mercado petrolero mundial.

No obstante, la naturaleza ambigua de la estrategia económica de Chávez dejó un espacio abierto para importantes iniciativas que indicaban enfoques económicos más modernos. Por ejemplo, los inversionistas alabaron las innovadoras políticas respecto a los sectores de alta tecnología. Así, Conatel, el organismo regulador de las telecomunicaciones, siguió una línea en pro de la competencia y abrió nuevos servicios a licitación. Este sector reflejó la mayor tasa de crecimiento en el año 2000, el último año en que la empresa telefónica privatizada disfrutaría de su monopolio de los servicios básicos.

Cuando Chávez nombró a mediados de 1999 al controversial Héctor Ciavaldini como presidente de PDVSA en sustitución de Mandini, surgieron ciertas dudas acerca de los planes gubernamentales en materia petrolera. A esto le siguió un período de conflicto, con la renuncia de muchos ejecutivos petroleros experimentados, quienes denunciaron que la industria estaba siendo politizada. Pero en el 2000, después de un conflicto laboral manejado con torpeza, Ciavaldini fue reemplazado por Guaicaipuro Lameda, un respetado general que instauró un nuevo plan de expansión de la producción y la inversión, que en un principio devolvió la confianza a los inversionistas. Esta política llevaría eventualmente a la destitución de Lameda en 2002, lo cual, a su vez, generó una protesta de los ejecutivos petroleros en abril de ese año que amenazó la propia legitimidad del gobierno de Chávez.

Los planes para abrir la industria del gas a la inversión privada también siguieron adelante, a pesar del mantenimiento de un prolongado debate sobre la necesidad de definir e implantar una política de precios que generara el interés entre los inversionistas. Adicionalmente, una nueva ley de electricidad establecía conceptos muy avanzados, que buscaban la creación de un ambiente competitivo en las áreas de generación y distribución de energía eléctrica. Sin embargo, la misma nunca se implementó, limitándose las nuevas inversiones y, en consecuencia, la modernización del sector.

El gobierno de Chávez utilizó diversos medios para ofrecer financiamiento a la pequeña empresa a través del Banco del Pueblo Soberano y, luego, a través del Banco de Desarrollo Nacional (una transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela) y del Banco de la Mujer. Rápidamente, el Banco del Pueblo se vio en dificultades como consecuencia de fallas administrativas y de falta de un objetivo claro; en 2001 se aprobó una ley que establecía normas más laxas para estos bancos de orientación social, normas que a la larga podrían condenar a esas instituciones a depender de los subsidios del gobierno. El alto desempleo y un sector informal donde se concentraba más del 50% de la fuerza laboral, llevó al gobierno

a la búsqueda de mecanismos para brindar ayuda directa a los grupos más pobres. Con estos proyectos de apoyo a la “microempresa” Chávez buscaba resolver el problema de la pobreza ayudando a la gente que quería trabajar.

La reversión de 2001-2002

A principios de 2001 reinaba el optimismo en el gobierno. La mayoría de los indicadores macroeconómicos parecían dar crédito a la estrategia económica oficial, y las proyecciones del ministro de planificación apuntaban a una menor inflación, a un mayor crecimiento económico y a la consolidación de las reservas internacionales. Sin embargo, tanto en Venezuela como en el extranjero crecían las dudas, pues se percibía un excesivo optimismo en el gobierno que lo estaba llevando a definir unos planes de gasto en base a unos precios petroleros esperados que no se habían materializado. De hecho, la radicalización política del año 2001 se debió en buena medida a una arrogancia infundada del gobierno basada en lo que sólo era un efímero éxito económico.

La economía de los Estados Unidos estaba entrando en una recesión que debilitaría la economía mundial en general y los precios del petróleo en particular. Ya para el primer trimestre de 2001, el precio promedio del petróleo venezolano había caído en un 22% respecto al año anterior, y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre cayó casi un 20% adicional, muy por debajo del supuesto en que se había basado el presupuesto.

En el último trimestre de 2001, parecía que no había otra opción que admitir la necesidad de una nueva política económica, a pesar de que las cifras de fin de año todavía reflejaban un crecimiento positivo, aunque en descenso, del 2,7%. Pero el deterioro petrolero muy pronto se haría sentir en el resto de la economía, repitiéndose el ciclo que los venezolanos habían sufrido reiteradamente durante varias décadas.

¿Cómo reaccionó el gobierno de Chávez frente al clásico problema que presentaba la economía venezolana, máxime cuando la popularidad del régimen revolucionario se había reducido notablemente? Convencido de que las élites empresariales, laborales y eclesiásticas eran los responsables del largo deterioro del país, el Presidente atacó. Con el poder que le daba una nueva ley habilitante, dictó una serie de controversiales decretos-ley, tales como la Ley de Hidrocarburos que decepcionó a todos los que esperaban el retorno de las políticas petroleras expansivas de los años noventa, la Ley de Tierras, que hizo surgir dudas respecto al compromiso gubernamental de respetar la propiedad privada, la Ley de la Administración Pública, que hizo que los empleados públicos se le enfrentaran, y otras leyes sectoriales que llevaron a nuevos grupos a incorporarse a la oposición. El paro cívico del 10 de diciembre de 2001 reveló la magnitud de la oposición. El clima político se enrareció, empeorando la situación económica y estimulando una fuga de capitales insostenible que generó una caída de más de \$3 millardos de las reservas internacionales durante las primeras once semanas de 2002.

Una vez más, el gobierno se enfrentó a una situación similar a la crisis de 1999. Sin embargo, un factor que alivió el impacto de la caída de los precios petroleros fue la existencia del Fondo de Inversiones y Estabilización Macroeconómica (FIEM) donde se habían acumulado más de \$ 7 millardos desde 1999. En octubre de 2001, el gobierno cambió la normativa para los retiros del fondo, lo que hizo reforzar las dudas acerca de su verdadera intención de plegarse a cierta disciplina fiscal. Sin embargo, las necesidades de financiamiento público eran de tal magnitud que sólo una vigorosa recuperación del mercado petrolero podría evitar que la crisis se agravara. Esto hizo que a fines de 2002 la deuda pública interna sobrepasara los 14 billones de bolívares —equivalente a 14% del PIB— un monto cinco veces mayor que el de 1999, cuando esas obligaciones equivalían a tan sólo el 4% del PIB.

Ante esta situación insostenible, Chávez anunció un importante cambio de política económica en febrero de 2002. El Banco Central abandonaría la defensa de la tasa de cambio, dejando que el bolívar flotara libremente, lo que equivalía a una devaluación de facto de la moneda. Se reduciría el gasto y se aumentarían los tributos, especialmente a través de la reinstauración del mismo impuesto de emergencia utilizado en 1999, el impuesto al débito bancario. Para calmar a sus desilusionados seguidores, en especial a los pobres y a la clase media baja, el Presidente prometió mantener el gasto en salud, educación y asistencia social, y ampliar los programas de financiamiento a la pequeña empresa.

En marzo se produjo un nuevo respiro petrolero debido al inesperado repunte de los precios, en respuesta al recorte de producción decidido por la OPEP, y a la invasión militar a Afganistán. El mayor ingreso petrolero, combinado con el incremento de los impuestos indirectos, el creciente endeudamiento interno y el uso intensivo de los recursos del FIEM, le permitieron al gobierno seguir adelante con su política de expansión fiscal a lo largo de todo 2002. Sin embargo, ese fue un año de devaluación, recesión, alto desempleo y subempleo, mayor inflación y empobrecimiento. La agitación política, combinada con las tensiones sociales y la incertidumbre, generaron una fuga adicional de capitales, canalizando hacia el exterior buena parte de los recursos que se habían inyectado a la economía a través del gasto público.

Todo ello forzó al Banco Central a implantar una política monetaria restrictiva que elevó substancialmente las tasas de interés. El sector bancario también sintió la presión. La cartera morosa aumentó sustancialmente y la demanda de créditos bajó como consecuencia de los altos costos financieros y de la profunda recesión. Como las expectativas de devaluación hacían que la compra de dólares le resultara muy atractiva a los bancos, el ente emisor impuso limitaciones a la cantidad de divisas que éstos podían mantener. Sin embargo, durante 2002 los bancos obtuvieron elevadas ganancias cambiarias debido a la fuerte apreciación del dólar. Además, el Banco Central limitó su ayuda financiera, dejando a los bancos muy

pocas opciones para usar el dinero que captaban. Esa situación, aunada a las elevadas necesidades de financiamiento que tenía el gobierno, explica por qué los bancos compraron grandes cantidades de bonos públicos durante ese período, haciendo que la relación de inversiones en valores a activos totales aumentara en forma sostenida.

La inflación y la recesión fueron dos graves problemas durante 2002. La devaluación del bolívar, los mayores impuestos indirectos, los aumentos salariales y los altos costos financieros fueron las principales razones que hicieron que la tasa de inflación saltara a 31%, generando un deterioro del salario real. El nivel de actividad económica también cayó debido, por una parte, a la disminución de la producción petrolera a raíz de la reducción decretada por la OPEP en 2001 y, por la otra, a la grave contracción de los sectores no-petroleros. La devaluación, el aumento de las tasas de interés, la disminución del consumo y el desplome de la inversión a causa de la incertidumbre y las expectativas negativas explican la severa contracción de 6,4% del PIB durante los primeros tres trimestres de ese año. En los últimos meses de 2002 la situación empeoró a causa del paro cívico nacional de diciembre que paralizó la industria petrolera y limitó en gran medida otras actividades económicas. Esto hizo que el PIB total se contrajera en 8,9% en el año en general.

La devastación de 2003

La radicalización y la confrontación son sólo dos de los elementos que caracterizaron al 2003. La continuación del paro cívico hasta febrero de ese año tuvo un efecto devastador sobre toda la economía. El despido de más de 18.000 empleados de PDVSA, básicamente gerentes altos y medios y empleados altamente especializados, tuvo, y seguirá teniendo, consecuencias tan impactantes como la disminución de la capacidad de producción, degradación ambiental y un grave deterioro de algunos campos petroleros y de la infraestructura industrial.

La drástica contracción del salario real durante la primera mitad del año, combinada con los despidos masivos debido a la reducción de personal o simplemente a la quiebra de muchas empresas, empeoraron la ya desfavorable situación laboral, generándose un nivel de desempleo superior al 18% y un subempleo muy cercano al 55%. La pobreza, por su parte, aumentó en forma sustancial afectando a más del 70% de los hogares venezolanos.

Las condiciones políticas extremadamente desfavorables imperantes en enero hicieron que la fuga de capitales se disparara, generando esto una depreciación del bolívar de 47% en apenas un mes y una fuerte caída de las reservas internacionales. El 22 de enero el Banco Central suspendió todas las operaciones en divisas, y dos semanas más tarde se impusieron unos severos controles de cambio. Acto seguido, se implantó un estricto control de precios, fijándose algunos de éstos en niveles inferiores a los costos de producción. Esto condenó a muchos productores a trabajar con márgenes muy estrechos, o

simplemente a incurrir en pérdidas, viéndose forzados a cerrar. Durante los primeros cuatro meses del control de cambios el sistema estuvo totalmente inoperante; CADIVI, el nuevo organismo creado para la administración del control de cambios, sólo autorizó la entrega de 30 millones de dólares para las importaciones privadas, una cifra totalmente divorciada de la necesidad de divisas que tenía el país. Además, el gobierno hizo masivas importaciones de productos alimenticios básicos exoneradas de impuestos, especialmente de Cuba y Brasil, estableciendo una competencia desleal frente al productor privado. Esto reflejó el objetivo oficial de vengarse de la oposición política, y en particular del empresariado que había apoyado el paro.

Aunque en el tercer trimestre se hicieron algunos avances en la aprobación de los dólares oficiales para la importación y el servicio de la deuda, a principios de noviembre la situación distaba de ser normal. La actividad económica seguía deprimida. De hecho, después de una devastadora contracción de 27% del PIB durante el primer trimestre, en el segundo trimestre se siguió observando una honda depresión, al punto de que la contracción de las ventas de algunos sectores se ubicó entre un 20% y un 40%. Esto limitó la inflación a nivel del consumidor, pero los grandes aumentos de costos generados por la devaluación del bolívar hicieron que las inflaciones a nivel de productor y de mayorista fuesen substancialmente mayores. La contracción del poder adquisitivo de la población evitó que esos mayores costos se transfirieran en su totalidad al consumidor, lo que llevó a la materialización de una situación de inflación represada.

Es lógico inferir que en un escenario económico y político tan adverso el dinamismo de la inversión fuera prácticamente inexistente. Adicionalmente, la turbulencia política creada por la intención cada vez más generalizada de revocarle constitucionalmente el mandato a Chávez a través de un referéndum, y la respuesta autoritaria del gobierno, contribuyeron a crear un clima de creciente incertidumbre que prácticamente paralizó la inversión, deteriorándose aún más la infraestructura productiva.

Ante la presión cada vez mayor por encontrar una salida electoral a la crisis, el gobierno comenzó a implantar una política de franca expansión de gasto desde el tercer trimestre de 2003, a pesar del debilitamiento de los precios petroleros y de la merma recaudación fiscal causada por la recesión económica. Esto, obviamente, ensanchó la brecha fiscal, lo cual hizo que el gobierno, por una parte, forzara al Banco Central a financiar gasto público deficitario a través de la creación de unas utilidades cambiarias ficticias y, por la otra, incrementara notablemente su nivel de endeudamiento. Esto último, a su vez, indujo a que la banca local siguiera comprando bonos públicos en cantidades crecientes. Esta situación generó una serie de interrogantes en torno a la viabilidad futura de las finanzas públicas, a los posibles impactos inflacionarios del financiamiento del déficit público por el Banco Central y, por último, a los efectos que podría tener sobre la banca la creciente

adquisición de obligaciones del Estado, particularmente en el caso de múltiples bancos pequeños con bajos niveles patrimoniales.

La expansión fiscal de la segunda mitad de 2003 no generó expectativas favorables acerca de un posible fortalecimiento de la infraestructura pública. Los hospitales, escuelas, sistemas de transporte público y sistema vial se encontraban en un grave estado de deterioro a causa del bajo nivel de inversión y de los limitados gastos de mantenimiento. La alta concentración de gasto público en salarios y otras erogaciones corrientes llevaron al convencimiento de que la política fiscal expansiva tenía un fin mucho más político que económico.

Conclusiones

A cuatro años de la revolución de Chávez, muchos venezolanos no lograban todavía definir la política económica del régimen que habían elegido a finales de 1998. Una vez más, políticas que no lograban consolidar la racionalidad y la estabilidad fiscal habían generado una nueva crisis económica y política. Después de casi ser derrocado en abril de 2002, el Presidente reemplazó a su equipo económico. Los nuevos ministros de Finanzas, Planificación y Producción y Comercio —que contaban con credenciales profesionales ortodoxas, pero con poca experiencia política— trataron de restaurar la credibilidad entre los empresarios locales e internacionales, proponiendo un paquete tradicional de mayores impuestos y racionalidad del gasto público. Sin embargo, la resistencia política al régimen era tan fuerte que quienes habían estado clamando por esas mismas políticas se negaron a apoyar cualquier iniciativa de parte del gobierno. Chávez se encontró atrapado entre las críticas de sus acérrimos seguidores —quienes rechazaban el incremento de la pobreza— y de sus oponentes, que intentaban que el gobierno cargara con los costos de sus propios errores.

En muchos sentidos, la fórmula de Chávez implicaba realizar reformas que ya se habían intentado anteriormente, especialmente en el área de la regulación de los servicios públicos y del sector financiero. En materia energética, el gobierno en vez de revertir los planes de expansión de la industria petrolera y de desarrollo de actividades gasíferas y petroquímicas aguas abajo, mantuvo la tradición de restringir la producción según los dictámenes de la OPEP con el fin de apuntalar los precios.

Igualmente, el esfuerzo por controlar la inflación a través del anclaje del tipo de cambio representó la continuación de la política iniciada por el gobierno de Caldera; aunque, cuando la economía se debilitó, esto resultó ser tan frágil como las políticas anteriores. En materia de política comercial no se hicieron cambios de importancia; el gobierno se resistía a volver al proteccionismo de décadas atrás, pero también se negaba a considerar la posibilidad de implementar una política de liberalización comercial, ya fuese con los vecinos de América Latina o con la propuesta norteamericana del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Quizá, las mayores dudas respecto al futuro económico de Venezuela se fundaban precisamente en la ausencia de cambios implementados por el gobierno de Chávez. La economía no daba indicio alguno de estar liberándose de la dependencia del petróleo, lo que significaba la continuación del dominio del Estado sobre la economía. Los compromisos en materia social, especialmente respecto a la salud y a las pensiones, podían situar otra vez a Venezuela frente al dilema tantas veces vivido: demasiadas promesas de subsidios que excedían la capacidad de pago del gobierno. Adicionalmente, después de cuatro años faltaba ver si se lograban los avances hacia el sistema tributario efectivo que el gobierno había prometido, pero que aún no había logrado implementar en forma efectiva.

Sin embargo, es posible que los problemas más graves de la economía venezolana tuvieran muy poco que ver con la política económica como tal. Así, la política exterior de confrontación con los Estados Unidos envió señales de alerta a los inversionistas, quienes no se sentían seguros de la estabilidad de un país en desacuerdo con los planes de establecer un ALCA, con dudas sobre la globalización, y abiertamente crítico a la economía de mercado. Además, la llegada de una administración sin experiencia de gobierno, y descuidada respecto a las formalidades del control burocrático, abrió la posibilidad de nuevas fuentes de corrupción e ineficiencia, que podían acabar hasta con las mejores intenciones. Los informes acerca de la caótica ejecución de programas sociales como el Plan Bolívar 2000 y el Fondo Único Social, entre otros, aumentaron la incertidumbre, y contribuyeron a establecer una percepción de desorden en el manejo de la cosa pública. Políticamente, los continuos ataques del Presidente a los grupos de oposición y a los medios de comunicación crearon un clima de tensión social que habría podido socavar la mejor política económica, por no mencionar aquellas que adolecían de los mismos errores y debilidades de las implementadas en el pasado.

En resumen, Venezuela parecía estar asida a las estrategias económicas seguidas durante décadas, que no habían logrado generar el tipo de resultados necesarios para incrementar el ingreso y la calidad de vida de la población. La Quinta República prometió que, de alguna manera, los cambios políticos serían suficientes para hacer que la economía funcionase. Sin embargo, frente a otro fracaso que se hizo patente en las crisis políticas y económicas del 2002 y 2003, los venezolanos tenían que repensar cómo lograr la prosperidad, pero ahora en base a cambios reales en las políticas económicas que fueran más allá de las ilusiones y de la gran retórica.

Referencias

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1995). *Economic and Social Progress in Latin America, 1995 Report: Overcoming Volatility*. Washington: BID.
- Blanco Muñoz, Agustín. (1998). *Habla el Comandante*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Cátedra Pío Tamayo.
- Datos, C.A. (1995). "Pulso Nacional". Encuesta nacional llevada a cabo entre el 6 y el 27 de septiembre, 1995. Caracas: Datos.
- Fernández Nays, Antonio (1996). "El MBR-200 no desea otra insurgencia armada." *El Universal*, 11 de noviembre de 1996.
- Coronil, Fernando (1997). *The Magical State: Nature, Money and Modernity in Venezuela*. Chicago: Chicago University Press.
- Garrido, Alberto (1999). *Guerrilla y Conspiración Militar en Venezuela*. Caracas: Fondo Editorial Nacional.
- Giordani, Jorge y otros (1994). *Ciencia y Tecnología para Venezuela: Una propuesta alternativa*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Secretaría de Información y Comunicación de la APUCV.
- Gott, Richard (2000). *In the Shadow of the Liberator: Hugo Chávez and the Transformation of Venezuela*. London: Verso.
- Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman (1995). *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Kelly, Janet (2000). "Thoughts on the Constitution: Realignment of Ideas about the Economy and Changes in the Political System in Venezuela". Ponencia presentada en la Reunión Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Miami, 16 al 18 de marzo de 2000.
- Kornblith, Miriam (1998). *Venezuela en los 90: Las Crisis de la Democracia*. Caracas: Ediciones IESA.
- Krivoy, Ruth (2002). *Colapso, La Crisis Bancaria Venezolana de 1994*. Caracas: Ediciones IESA.

- MetroEconómica (Varios). *Reportes Generales. Las Perspectivas Económicas de Venezuela*. Caracas: MetroEconómica.
- Morse, Edward and James Richard (2002). "The Battle for Energy Dominance" *Foreign Affairs*. Marzo-Abril.
- Newbery, David and Joseph Stiglitz (1981). *The Theory of Commodity Price Stabilization: A Study in the Economics of Risk*. Oxford: Clarendon Press.
- Nordhaus, William (1995). "The Political Business Cycle" *Review of Economic Studies* 42 (abril 1975).
- O'Donnell, Guillermo (1973). *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism*. Berkeley: University of California.
- Olson, Mancur (1982). *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities*. New Haven: Yale University Press.
- Palma, Pedro A. (1989) "La Economía Venezolana en el Período 1974-1988: ¿Últimos Años de una Economía Rentista?" en Grau – Sierra y Otros *Venezuela Contemporánea 1974-1989*. Caracas: Fundación Mendoza, 157-248.
- República Bolivariana de Venezuela (1999). "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela." *Gaceta Oficial*, No. 36.860 (30 de diciembre de 1999).
- República Bolivariana de Venezuela. (2000). "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela." *Gaceta Oficial*, No. 5.453 (24 de marzo de 2000).
- República de Venezuela (1999). *Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2000*. Caracas.
- Schleifer, Andrei, and Robert W. Vishny (1998). *The Grabbing Hand: Government Pathologies and their Cures*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Tugwell, Franklin (1975). *The Politics of Oil in Venezuela*. Stanford: Stanford University Press.
- Vallenilla Lanz, Laureano (1990). *El Cesarismo Necesario: Estudios sobre las Bases Sociológicas de la Constitución Efectiva*. Caracas: Monte Avila.

Yergin, Daniel (1991). *The Prize: The Epic Quest for Power, Money and Oil*. New York: Touchstone.

¹ Para un excelente repaso de la historia del petróleo, véase a Yergin (1991). Para conocer la historia de los inicios de la industria petrolera en Venezuela, refiérase a Tugwell (1975).

² Ver Palma (1989)

³ Para un excelente recuento de la situación a principios de 1989, véase Kornblith (1998).

⁴ Véase al recuento de la crisis financiera por la ex presidenta del Banco Central, Krivoy (2002).

⁵ En marzo de 1998, Venezuela aceptó una reducción de 200.000 barriles diarios en la cuota de producción de la OPEP y una segunda reducción de 325.000 barriles, en junio de 1998, reduciendo su producción autorizada a 2.85 millones de barriles por día, de un nivel base de producción de 3.3 millones de barriles diarios que tenía en febrero. Véase a <http://www.opec.org>.

⁶ Hugo Chávez y la Comisión Presidencial Constituyente, “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República”. Caracas: August 5, 1999.

⁷ El texto definitivo aprobado por el referéndum del 15 de diciembre de 1999 se publicó el 30 de diciembre en Gaceta Oficial y se volvió a publicar el 24 de marzo de 2000, después de hacerse la corrección de algunos errores. Esto hizo que surgieran algunos conflictos acerca de la validez de los textos sometidos a las votaciones en la Asamblea Constituyente, las correcciones de estilo efectuadas en la “versión definitiva” y las correcciones adicionales publicadas en marzo. Estas diferencias no afectaron de una manera sustancial las cláusulas económicas.

⁸ Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), “Informe para los afiliados sobre los aspectos económicos de la constitución aprobada en el referéndum del 15 de diciembre de 1999.” (Caracas: VenAmCham, Mimeografía, 2000).